

CHILE: EL RECESO

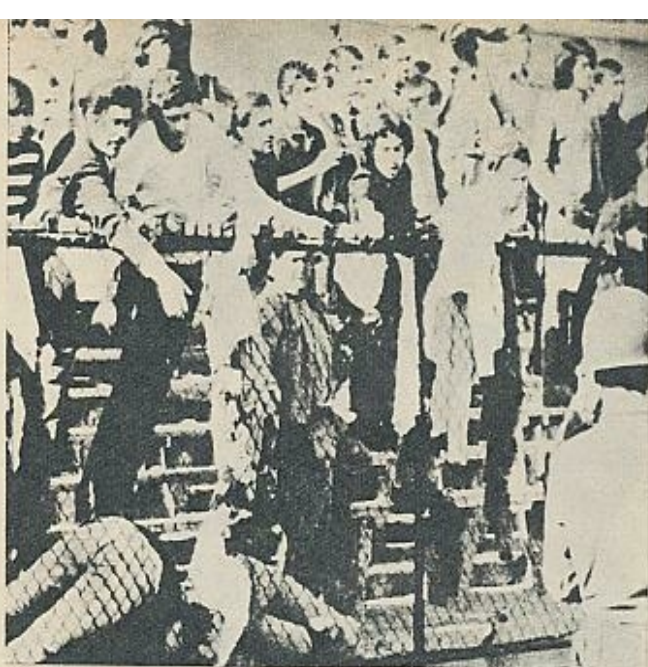
EL 11 de septiembre sucedió en Chile el golpe violento que derribó presidencia, constitución, parlamento, democracia y una larga tradición de mutaciones pacíficas en la política. No puede decirse que haya terminado todavía. «Prosigue con éxito la labor de caza y captura de políticos y funcionarios del antiguo régimen», relata, con fecha 29, el enviado especial de «Ya», Luis Apostúa, al señalar las «buenas noticias» —para la Junta— del fin de semana. «Siguen los «allanamientos» y «operativos», la captura de armas, las detenciones y, de vez en cuando, los tiritos nocturnos en la lejanía», escribe en la misma fecha Luis Calvo, en «A B C». Es una operación larga. Si pensamos que la Junta se ha propuesto «extirpar el cáncer marxista», según uno de sus miembros, y que en las últimas elecciones el 44 por 100 de los votantes chilenos se manifestaron a favor de ese cáncer, podemos imaginarnos hasta dónde llegará la represión. Los servicios de policía no bastan para completar la caza y captura; es precisa la colaboración de los ciudadanos (de orden) y, por si sus ideologías o sus razones personales no bastasen, se ofrecen recompensas: medio millón de escudos. La cifra es engañosa: el total en pesetas no llega a las nueve mil. Un segundo estímulo es más interesante: el denunciante será recompensado con todo el dinero que lleve encima el denunciado en el momento de ser detenido. Ello da un aliciente de azar, de lotería, a la operación de denuncia: con un poco de suerte puede ocurrir que el denunciado lleve encima bastante dinero, el que haya podido recoger o recaudar de entre sus familiares o amigos para poder huir, para pagar el escondite. Como la Junta dice que los fugitivos, los «prófugos» —es la palabra que emplean— robaron grandes cantidades de dinero del erario público, la ilusión por poder denunciar a esos magnates de la política es grande: una buena denuncia puede ser el «gordo» de la sangrienta lotería humana. ¿Sangrienta o no sangrienta? «The Times», de Londres (derecha conservadora) dice en un editorial que «hay pocas dudas de que este es el más sangriento de los levantamientos políticos que haya conocido América Latina desde la revolución mexicana». Un record que parecía difícil de superar. «A lo que hay que añadir —dice— los mezquinos intentos de oscurecer la vida privada del difunto presidente, el saqueo de residencias privadas (incluyendo la del poeta Pablo Neruda unos días antes de su muerte por cáncer), y las quemaduras de libros marxistas» (Apostúa justifica la razón de estas hogueras... literatura marxista, que a veces queman para desembarazarse de ella). Pero se está en derecho de creer que nada de esto sea así. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, anuncia oficialmente que no hay ejecuciones en masa, según las investigaciones realizadas por sus funcionarios en Chile. Kubisch, ayudante del secretario de Estado para asuntos interamericanos, dice que «dos representantes de la Cruz Roja Internacional, y el cuerpo de prensa extranjera han hablado con detenidos políticos y, aparentemente, no han recibido información que pueda sostener las acusaciones de ejecuciones en masa». Las fuentes de información privadas en los mismos Estados Unidos no coinciden. Una pareja de ciudadanos norteamericanos que ha llegado a Miami dice que ha presenciado cuatrocientas o quinientas ejecuciones en el Estadio Nacional, donde hay siete mil prisioneros políticos desde el levantamiento. Lo cuenta el columnista William F. Buckley, Jr. («Herald Tribune»), quien expresa su incredulidad ante este relato y, finalmente, su escasa importancia si fuese cierto entre otras cifras: «Chu en Lai o Mao Se-Tung, con respecto a los cuales no hay rumores de que hayan ejecutado a cuatrocientas o quinientas personas, sino de los que hay pruebas de que han ejecutado a sus conciudadanos por millones», le inquietan más. El enviado especial del semanario «Newsweek» dice: «Un sacerdote llama

do para dar la absolución a los muertos en la Universidad Técnica, me dijo que había contado doscientos cuerpos. Una enfermera dice que a su hospital fueron llevados setecientos cincuenta cadáveres en un solo día».

ESBOZO este cuadro más o menos como lo recibo, según informaciones que leo de un lado o de otro. Entiendo que todavía no se pueden recibir noticias de las llamadas políticas de Chile que dibujen con alguna consistencia lo que va a ser el futuro de ese desgraciado país, porque sin duda no sobrevendrán hasta que pase esta etapa. Que puede durar mucho tiempo. Hay ya, sin embargo, algunos indicios. De entre las declaraciones individuales de los miembros de la Junta, de las de los políticos que colaboraron a que esta situación se produjera —como Alwyn, presidente de la Democracia Cristiana chilena, a «Informaciones», de Madrid: «Nosotros no creemos que (los partidos) puedan ser suprimidos por decreto» o las de autoridades morales llenas de buenos deseos —como el Cardenal Silva Henríquez a Guillermo Medina, también de «Informaciones»: «No son trogloditas; son militares muy eficientes y con espíritu de sacrificio, pero no creo que sean hombres que deseen imponer al país una dictadura»— no se puede obtener gran cosa. Quizá porque no la hay. Más concreta puede ser la declaración emitida por el secretariado general del Gobierno. Esta declaración explica que el levantamiento era el resultante de «una profunda crisis provocada por una excesiva politización». Se tratará, por lo tanto, de reducir la politización de la vida chilena, y esto parece aplicable tanto a la izquierda como a la derecha. Los partidos políticos han entrado en lo que se llama «receso» por la Junta. Es un americanismo que figura como tal en el diccionario con el significado de «cesación, suspensión, vacación». Este receso durará «tanto tiempo como sea preciso». En tal receso se incluyen el Congreso —todos cuyos escaños han quedado vacantes, a pesar de que la mayoría era de la derecha—, los cargos de la administración local (municipales) que hubiesen sido provistos por elecciones (son sustituidos por autoridades consideradas como no políticas) y los partidos políticos, que entran en receso «como una medida temporal durante el período de reconstrucción», según una aclaración de Federico Willoughby, secretario de prensa de la Junta. Recordemos que la primera medida había sido la suspensión de los partidos considerados mar-

El general Pinochet y el almirante Ismael Huerta, ministro de Asuntos Exteriores, reciben al embajador del Uruguay, uno de los primeros países en reconocer a la nueva Junta.





En el Estadio Nacional de Santiago de Chile se hallan detenidas unas 7.000 personas, acusadas por la Junta Militar golpista de pertenecer a organizaciones de la izquierda chilena.

xistas, y que esta otra suspensión —temporal— de todos los demás partidos es un segundo paso.

La reconstrucción nacional, sin duda, comienza con este periodo de eliminación de personas e instituciones pertenecientes al régimen anterior, y se fijará en una nueva constitución. Es, sin duda, el tema que más interesa a los representantes de los partidos que colaboraron en la caída de Allende —los otros, sin duda, no están ahora en condiciones de interesarse por cualquier forma de constitución—. No se sabe si en ella van a estar reconocidos los partidos políticos o si más bien será de un estilo corporativo —el corporativismo fue el nombre que aplicó Mussolini a la institucionalización de su país después de la toma del poder fascista—; Alwyn, en las declaraciones citadas, dice: «No creo, y opino como profesor de derecho político, que se puedan improvisar fácilmente (las constituciones) sobre sistemas corporativistas... Además, ella debe ser consagrada por el pueblo, por el poder constituyente. Y al pueblo no se le podrá imponer algo de esta naturaleza». El profesor de derecho político no lo es, sin duda, de historia. Y la idea de que la nueva constitución, que aún ha de redactarse, pueda ser sometida al pueblo por referéndum o plebiscito, no debe excluirse. Puede tener tantos votos favorables como ha tenido recientemente la constitución griega y el paso de monarquía a república.

PERO, ¿va a bastar este despliegue de fuerza para asegurar la política actual de la Junta? Creo que en otro artículo anterior he hablado ya del abuso que supone hablar de Junta Militar, o de atribuir un carácter militar a estos golpistas, cuando militares eran también Carlos Prats o el asesinado Schneider, o algunos de los recientemente apartados, detenidos o reprimidos. Alwyn parece sostener en sus declaraciones algo muy parecido o muy significativo en esa línea: «Según nuestros conocimientos, las fuerzas armadas chilenas no son reaccionarias, por su tradición y por la extracción mayoritaria de clase media entre sus miembros. Reconocemos que hay peligros, porque hay tendencias de ultraderecha económica y política que se están aprovechando de esta situación (...). Si esas tendencias ultraderechistas llegaran a aparecer tras la etiqueta del gremialismo o de los grupos políticos, nos encontrarán en la barricada opuesta. De todas maneras creemos que si esto sucediera encontrarán barreras en los sindicatos, en los partidos políticos y en la conciencia democrática de los chilenos». ¿Es ya la moderada y atemorizada organización de una oposición? Quizá, la Junta actual vaya a encontrar pronto alguna resistencia o alguna disidencia entre quienes ahora la apoyan. Si la revolución devora a sus hijos, la contrarrevolución también. Detrás de cada Naguib hay un Nasser; detrás de cada Ben Bella hay un Bumedian. Esto no es más que una de las eventualidades. Otra es la de la llamada «Operación submarina» —según informaciones de la propia Junta—: es decir, la creación de una red clandestina, con armas y abrigos, de algunos resistentes —se cita al MAPU, cristiano de izquierdas, y al MIR, revolucionario marxista— para aguantar una larga clandestinidad con acciones de guerrillas y comandos urbanos; la dureza de la represión y de las persecuciones está destinada a acabar con esa red, pero también puede ocurrir que la incremente.

PERO puede predecirse que si la Junta actual mantiene su dureza con los extremos con que ha iniciado su actuación, y si conserva —con esa misma dureza— su propia unidad, el régimen puede ser de larga duración. Construirá su legalidad propia, promulgará su constitución, se aliará con los gobiernos de ultraderecha del continente que están muy próximos, recibirá la ayuda de los Estados Unidos y no será tan fácil que le desalojen del poder, ni los marxistas ni los antimarxistas que lo han provocado.

ARGENTINA

¿QUIEN MATO A RUCCI?

El 25 de septiembre, el secretario general de la CGT —los sindicatos— de la República Argentina fue asesinado. Cayó un explosivo desde lo alto de una casa sobre su coche, e inmediatamente hubo disparos cruzados desde varios puntos. Rucci murió en el acto. Rucci era el hombre que había dirigido la fuerza obrera del país en favor de Perón —tras la muerte sucesiva de otros seis jefes sindicales, a partir del "Lobo" Vandor— y formaba parte del "circulo interior", de la camarilla más próxima al presidente electo, con López Rega y con Isabelita, esposa del general, y ahora vicepresidente de la nación. Desde la izquierda se le suponía autor de la matanza de Ezeiza —liquidación de cuentas contra sindicalistas de izquierdas en el aeropuerto donde se esperaba el avión en que regresaba Perón desde Madrid—. Veinticuatro horas antes, el presidente provisional de la Argentina, Raúl Lastiri, había decretado que el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, quedase fuera de la ley. Medida obvia, porque realmente ya lo estaba. Del ERP se suele decir que es trotskista, más que por una doctrina ideológica que no tiene, porque es disidente del comunismo oficial, de la izquierda, a la que considera colaboracionista con un régimen que la camarilla de Perón se está llevando a la derecha. La relación de causa a efecto era fácil: el ERP se vengaba de esta declaración asesinando a Rucci. El jefe de la policía federal anunció que el ERP se había hecho cargo del crimen mediante un comunicado. Telefónico. Inmediatamente comenzaron unas represiones y unas persecuciones contra el grupo y sus afines, al mismo tiempo que una huelga general de protesta. En ese momento se cometió otro crimen: Enrique Gringberg, jefe de las juventudes peronistas, moría a balazos.

Pero el ERP niega que haya cometido esos asesinatos. Una nota aparentemente autenticada fue recibida por el diario "El Mundo"; en ella el ejército revolucionario negaba el crimen. "El Mundo" la publicó, e inmediatamente su edición fue confiscada. Las autoridades se basaron en que, tratándose de un partido fuera de la ley, toda reproducción de sus comunicados o manifiestos estaba también fuera de la ley, y por lo tanto, el periódico no podía circular. Los rumores de que los asesinos de Rucci tienen otros intereses y

hay que buscarlos en otros lugares se acentúan. Pocas horas antes de su muerte, la misma mañana, Rucci había recibido un anónimo singular. Era un dibujo en el que se veía un ataúd con el retrato de Rucci, sobre el que se inclinaba, con una corona de flores, José López Rega, "el Brujo", secretario particular de Perón, de quien se dice que domina todos los hilos de la política de la Casa Rosada; en la corona de flores había una cinta con la inscripción "Hora cero, día X". El dibujo estaba hecho en un papel con membrete del sindicato de los metalúrgicos. La primera interpretación de este dibujo era la de que Rucci estaba condenado a morir y su amigo López Rega iría a llevarle a su tumba. Ahora brotan en Buenos Aires otras interpretaciones. Como la de que el dibujo, más que una amenaza, era una advertencia burlesca a Rucci de que su peor enemigo era López Rega y que le eliminaría en el momento preciso, en el momento que él decidiera. Las razones para ello serían las de que José Rucci, con la fuerza obrera en sus manos, podría contrarrestar la política doméstica de la Casa Rosada, los propósitos de "el Brujo" López Rega. Y aún más, que en un caso de sucesión por muerte, natural o accidental, del general Perón, Rucci podría tener muchas más posibilidades de ascenso a la Casa Rosada que López Rega o que la persona que a López Rega conviniese. En todo caso, Rucci arrojó el dibujo a la cesta de los papeles sin prestarle demasiada importancia y con una sola frase: "¡Uno más!".

Las guerrillas del ERP no suelen limitarse en el uso de la ametralladora o del explosivo; en el uso del secuestro o de cualquiera de los sistemas de violencia, en una situación donde desde hace años política y vidas humanas están en muy estrecha relación. No es fácil de comprender, sin embargo, el interés táctico o estratégico que podrían tener en un acto como este, capaz de alinearles gran parte de la opinión pública y señal para una represión sin límites.

Hasta ahora las pesquisas dirigidas por el general Miguel Iniguez —que había sido nombrado jefe de la policía federal muy poco antes del asesinato de Rucci y que tiene fama de hombre implacable— no han dado ningún resultado. Cientos de detenciones, pero ninguna que haya podido ser conectada con la acción contra José Rucci.